

Carta de París.

Un verano letal

Gustavo Guerrero

El 10 de agosto se anuncia que la ola de calor se ha cobrado sus primeras víctimas: unos cincuenta muertos en la capital y en sus alrededores. Dos días después, los muertos son ya unos cien más o menos dispersos por todo el territorio. Hace ciertamente mucho calor y la prensa dedica sus portadas a la sequía y a los problemas de los criadores de cerdos y pollos, incluso ese 14 de agosto en que la Dirección General de la Salud hace pública la alarmante y escandalosa cifra de tres mil muertos. Pero la cosa no para allí. El 17 el ministro del ramo considera «plausible» la hipótesis de cinco mil decesos. Para su desgracia, el 20 el Sindicato Nacional de Pompas Fúnebres lo desdice y señala que ha habido cuando menos trece mil muertes suplementarias desde el comienzo del mes. En fin, *last but not least*, el diario *La Tribuna de la Economía* del viernes 22, citando fuentes de los servicios de inteligencia, lleva el número de víctimas hasta quince mil. Mientras tanto, varios miembros del gobierno, desde sus lugares de veraneo, se quejan de las especulaciones de los medios de comunicación y fustigan la escasa seriedad con que se está manejando tan grave asunto.

Un mes más tarde, las conclusiones de las pesquisas llevadas a cabo por el Instituto Nacional de la Salud y la Investigación Médica (INSERM) establecen con escaso margen de error que el número de muertes acaecidas durante la ola de calor del mes de agosto fue de catorce mil ochocientos dos. La deshidratación, la hipertermia y los problemas respiratorios y cardiovasculares se señalan en el documento como las causas más frecuentes de una hecatombe que afectó esencialmente a las gentes de la tercera edad, pues más del 70% de las víctimas tenía más de 75 años y, en su inmensa mayoría, no contaba con grandes recursos. Aunque ya pareciera que sobran motivos de indignación, es necesario añadir una cifra más que viene a completar este cuadro dantesco: casi cinco mil ancianos –una tercera parte de los que perecieron– murieron solos en sus domicilios y, en buen número de casos, hubo que llamar a los bomberos para que abrieran las puertas y recogieran los cadáveres. Muchos televidentes recordaremos durante años esas imágenes de la Cadena 2 en las que se ve a un joven bombero

entrando por una ventana en un diminuto apartamento donde yace, en un sillón, el cuerpo de una anciana deshidratada delante de un televisor que sigue obstinadamente encendido.

No quiero acentuar el patetismo de algo que ya es de suyo bastante patético, ni me interesa tampoco suscitar en el lector sentimientos de horror o conmiseración, como aquellos que, según Aristóteles, presidían la catarsis entre los griegos. Mi relato y mis cifras sólo aspiran a dar una cierta idea del desastre que se ha vivido en Francia durante este último verano, una auténtica tragedia cuyas consecuencias políticas, sociales y morales, a mi modo de ver, no han sido aún lo suficientemente sopesadas. Y es que, por de pronto, la discusión se ha centrado básicamente en la serie de errores técnicos e institucionales que impidieron que se evaluaran con rapidez las dimensiones de la catástrofe y se tomaran a tiempo las medidas necesarias para atajarla. Al parecer, el cuerpo de bomberos, que depende del Ministerio del Interior, no transmitió las informaciones correspondientes al Ministerio de Sanidad. Por su parte, las clínicas privadas y los médicos particulares callaron cuando debían haber advertido del aumento de la mortalidad a las autoridades competentes. Y no hablemos de los medios de comunicación: en plena canícula de agosto, muy pocos –poquísimos– dieron cuenta de lo que realmente estaba pasando en el país. Fueron los médicos de los servicios de urgencias los que acabaron dando la voz de alarma, hartos ya de ver morir a tanta gente en la más completa indiferencia.

Esta faceta técnico-institucional de la crisis ha suscitado, a su vez, una serie de preguntas políticas que ponen en tela de juicio la acción –o inacción– del gobierno: ¿por qué no funcionaron los dispositivos de alerta sanitaria? ¿Dónde estaban los responsables administrativos de ese sistema de seguridad nacional? ¿Por qué faltó personal cualificado en los hospitales y pensionados? ¿Por qué faltaron tantas ambulancias y camas? ¿Quién redujo el tiempo de trabajo en los hospitales y la contratación de médicos y enfermeras? ¿Cuál es el modelo de sanidad pública que se quiere imponer a través de la distribución de los presupuestos del Ministerio? ¿Por qué un país como Francia, a diferencia de otros países europeos, no está preparado para hacer frente a una ola de calor cuando resulta cada vez más evidente que asistimos a un recalentamiento global del planeta y que los veranos se vuelven más y más calurosos?

Para un vasto sector de la opinión pública francesa, no hace falta ir más lejos: los verdaderos responsables –culpables– del drama de agosto son el gobierno y el aparato del Estado. La imprevisión, lentitud e ineficacia de que hicieron gala, provocaron una desgracia que nunca hubiera debido ocurrir y cuyas causas no sólo hay que buscarlas en el cambio climático sino

también –y sobre todo– en las fallas y carencias del sistema sanitario francés. Y es que en la Francia republicana –el mejor de los mundos posibles– nada de esto tendría que haber pasado. Tal es la sentencia con la que muchos han querido poner fin a la discusión, haciendo caso omiso de unas palabras del propio Presidente de la República quien, al comentar los resultados de las primeras investigaciones, declaraba que el fracaso del Estado ante la crisis debía servir para que la sociedad toda reflexionara sobre su manera de entender y practicar los valores de la solidaridad.

Este es sin lugar a duda el punto de partida de otro u otros debates que tardan en abrirse y que ponen en tela de juicio no ya el funcionamiento de las instituciones o la política del gobierno sino la actitud misma de los ciudadanos. La canícula ha hecho efectivamente visibles las insuficiencias sanitarias del país, pero también ha desvelado los estragos que el individualismo ha ido produciendo en el tejido social, la situación de abandono en que se encuentran hoy muchos ancianos y la delegación colectiva de los deberes éticos y humanitarios en manos del Estado. Cada uno de estos tres factores participa por igual de la enfermedad del sentir comunitario que tuvo una influencia determinante en la agravación de la tragedia. Y es que si fueron tantos los ancianos que murieron solos, la causa no es únicamente el calor ni la incapacidad de las autoridades sino el creciente aislamiento al que los condena una sociedad donde el egoísmo se confunde a diario con el sacrosanto respeto a la intimidad y éste acaba justificando, a su vez, la total indiferencia. La situación es, en verdad, triste y penosa. Nadie ignora que, en París, por ejemplo, el porcentaje de personas que viven solas es uno de los más elevados del mundo y que, entre estos solitarios, pocos conocen a sus vecinos y muchos incluso evitan saludarlos, pues de ese modo –me lo han explicado– preservan la exclusividad de su espacio privado y no se ven obligados a tratar con personas ajenas. Tenía razón el cómico Coluche cuando decía o, mejor, gritaba hace algunos años: «¡Aquí parece que cada día hay más individuos y menos seres humanos!»

El relajamiento, cuando no la desaparición, de los vínculos familiares forma parte de este degradado paisaje afectivo que funcionó como un amplificador de la catástrofe. Tres semanas después, todavía quedaban cientos de cuerpos sin reclamar en las morgues o en los camiones frigoríficos que hicieron las veces de morgues improvisadas y ambulantes. Algún genealogista declaró consternado que, aunque se identificara a los parientes, había familias que simplemente se negaban a recoger los cuerpos de las víctimas y a correr con los costes de las exequias. ¿Cuántos acabaron en fosas comunes? No lo sabemos. Lo que sí se sabe es que, detrás de semejante comportamiento, no sólo hay motivos económicos o personales sino,

además, un horror muy extendido a la vejez y a la muerte que ha roto la cadena de solidaridad entre las generaciones. En Francia, como en muchos países de Europa, el culto al ideal juvenil tiene esta otra cara monstruosa: un repudio hacia los ancianos que se manifiesta de mil formas en la vida cotidiana, como hacerles culpables del déficit de la Seguridad Social o de los problemas de circulación en las ciudades. No faltó así quien, en medio de la crisis, afirmó que el calor sólo venía a completar al fin y al cabo la obra del tiempo. Otro dato elocuente nos lo da el mercado laboral: en un país con casi 10% de parados, uno de los raros rubros en los que sobran empleos es el de asistencia a domicilio de discapacitados y personas de la tercera edad.

Mi libertad acaba allí donde empieza la libertad del otro, pero ¿dónde empieza mi deber de solidaridad? ¿Puede el ciudadano delegar sus obligaciones morales en el Estado y debe éste asumirlas como parte de sus funciones tanto en un plano nacional como internacional? ¿Quién es más responsable de los más débiles? ¿Las instituciones, los gobiernos, las asociaciones o cada uno de nosotros? ¿Cómo se reparten las responsabilidades y quién debe hacer qué no sólo en situaciones de urgencia sino en la vida de cada día? Los terribles eventos de agosto pasado han dejado en Francia esta estela de interrogantes que aún buscan una respuesta, pero que piden sobre todo un cambio radical en las mentalidades, única garantía de un auténtico cambio social. De él dependerá que no se repitan las lamentables escenas que se vivieron este verano o que se produzcan otras aún más aterradoras. Catorce mil ochocientos dos muertos y un sentimiento de vergüenza colectiva: quizá sea éste el doloroso precio que la República Francesa tenga que pagar hoy para volver a darle sentido en su divisa, junto a la libertad y a la igualdad, al olvidado valor de la fraternidad.